

También se observan pérdidas del ingreso en servicios financieros (11.7%), construcción (9.3%), transporte (5.1%) y manufactura y comercio con una disminución del orden del 4%. Se nota una importante mejoría (27.5%) en el área de electricidad, gas y agua.

Al comparar el ingreso medio, proveniente del trabajo, entre mujeres y hombres, se tiene que el de las mujeres equivale a 0.8 veces el medio global, en tanto el de los hombres alcanza a 1.11 veces (cuadro 4.14). Esto se debe a la menor participación de la mujer en el mercado laboral, mayor en el empleo informal y más bajas remuneraciones. Por estos mismos motivos se aprecia que la pérdida en el salario de las mujeres (3%), entre 1998 y 1999, es menor a la revelada por el ingreso masculino (12.5%). Sin duda que este menor deterioro es favorecido por su más elevada presencia en el sector informal (más flexible a las demandas del mercado laboral) y porque sus salarios ya se encuentran en un margen inferior al del sector formal: por ser más bajos sufren menos variaciones frente a una crisis.

En cuanto a dominios, se observa que la población ocupada tiende a evolucionar positivamente, salvo en las ciudades medianas, en las cuales aparece una contracción, lo cual podría explicarse por

el desplazamiento de población hacia el distrito central o ciudades pequeñas, en donde ha habido un aumento de la PEA (Cuadro 4.15).

En el descenso de los ingresos se percibe un nexo bastante claro con el grado de urbanización. Así, las áreas rurales son las que han soportado las mayores pérdidas (18.6%), seguidas de las de las ciudades pequeñas (15.4%), debido, lógicamente, a que, en cuanto a producción, la agropecuaria fue la que sufrió mayor devastación.

Un caso especial es San Pedro Sula, donde el descenso de los ingresos ha sido bastante pronunciado (8.2%). Esto puede explicarse por la importancia de la agroindustria y los serios daños que, en general, sufrió este importante polo de desarrollo nacional. Esto se confirma en el menor crecimiento de la ocupación (3.6) frente al nivel promedio nacional (4.5%).

La tendencia observada a un crecimiento de la fuerza laboral parece reflejar, en primer lugar, una mayor demanda de empleo, producto de la inestabilidad del mercado laboral y la disminución de los niveles de ingreso. En segundo lugar, debido a que se concentra, principalmente, en la población joven, puede indicar, también, que en buena parte se ha producido a costas de un aumento de la deserción escolar, lo que puede tener efectos negativos, a largo plazo, en la capacitación de la fuerza laboral y, por lo tanto, en que persistan bajos niveles de productividad del trabajo.

Este crecimiento de la PEA se da asociado a modificaciones en la estructura productiva caracterizadas por un aumento de las categorías más ligadas al sector informal (los trabajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados) y una consolidación de las pequeñas unidades productivas (con menos de 10 empleados). Esto refleja que si bien el desempleo no crece, los puestos de trabajo que se pierden son absorbidos por el sector informal. El resultado es un aumento del subempleo visible, es decir del trabajo esporádico. Al mismo tiempo, se nota un deterioro en las categorías de empleo formal y también en las de mayor nivel de remuneración.

CUADRO 4.14

Ingreso real promedio población ocupada según sexo, 1998 - 1999

Sexo	Ingreso 1998	Población 1998	Ingreso 1999	Población 1999	% caída
Hombre	2,418	1,177,580	2,116	1,223,467	-12.5
Mujer	1,572	649,457	1,525	685,517	-3.0
Total	2,118	1,827,037	1,904	1,908,984	-10.1

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 1998 - 1999

CUADRO 4.15

Ingreso real promedio de la población ocupada por dominio, 1998 - 1999

Dominio	Ingreso 1998	Población 1998	Ingreso 1999	Población 1999	% Variación ocupados	% Variación ingreso
Distrito Central	2,641	327,975	2,719	348,314	6.2	3
San Pedro Sula	3,466	170,749	3,181	176,883	3.6	-8.2
Ciudades medianas	2,580	153,497	2,558	145,810	-5	-0.8
Ciudades pequeñas	2,246	280,153	1,901	296,944	6	-15.4
Rural	1,549	894,663	1,261	941,033	5.2	-18.6
Total	2,118	1,827,037	1,904	1,908,984	4.5	-10.1

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples, 1998 - 1999.

Con relación al comportamiento por rama, se evidencia un fuerte deterioro de las actividades mineras y un crecimiento del empleo agropecuario. Esto coincide con la fuerte baja manifestada por el ingreso en esta rama de actividad, donde si bien es cierto que los ocupados siguen aumentando, también lo es, que laboran con menores remuneraciones (especialmente quienes lo hacen por cuenta propia). Esto indica cambios en la estructura ocupacional y el aumento de las formas de subempleo agrícola.

También ha habido un incremento de los ocupados en comercio y servicios, lo que, ligado a una incorporación laboral más precaria, brinda indicios sobre el incremento del empleo en servicios de baja productividad para absorber mano de obra desempleada

Desafíos

En cuanto a las políticas globales, queda claro que después del Mitch se agudizaron aquellos problemas estructurales que ya presentaba el desarrollo del país antes del huracán. Es decir, fenómenos como la informalización del trabajo, que no tiene nada de nuevo, responden a un modelo económico que fundamenta, en gran parte, su rentabilidad en este tipo de actividades. Esto, a su vez, no estimula la capacitación de la población, ya que los niveles salariales privilegian la mano de obra menos preparada y, por ello, menos costosa.

Por lo tanto, cualquier acción que se intente para mejorar las características del empleo y sus niveles de educación pasa por la necesidad de reformular un modelo productivo orientado a incorporar más valor agregado

Asimismo, el aumento del valor agregado de la producción por medio del fortalecimiento del capital humano abre puertas más amplias para el desarrollo, ya que un modelo centrado en la extracción de recursos naturales y realizado de una forma no sustentable, va perdiendo competitividad en los mercados globalizados. En estos se demandan, crecientemente, mayores estándares de calidad y más observancia de las normas que evitan el deterioro ambiental

Al mismo tiempo, el aumento en la calidad de la producción representa un camino para mejorar la productividad del trabajo y los beneficios para los trabajadores por cuanto los modelos crecientemente centrados en el capital y menos en el trabajo, tienden, por lógica, a retribuir en menor medida el aporte del capital humano si éste no es sustantivo. También se requiere de una actitud empresarial más dinámica en el sentido de presentar más alternativas productivas y más capacidad de innovar la producción y el producto

De igual forma la oferta educacional debe replantearse en términos de favorecer una formación más adecuada especialmente en los primeros estratos de la escala educativa. Asegurar una educa-

ción de buena calidad y pertinente a las realidades del país, aunque sea corta, permite preparar mejor a quienes van a incorporarse al trabajo y es más realista en cuanto a la pretensión de tratar de retener en el sistema educativo, por un largo período, a toda la población

La educación

El impacto del desastre

La tarea principal que ha condicionado la vida individual, social e institucional en 1999 ha sido la superación de las secuelas dejadas por el huracán Mitch y el inicio de la reconstrucción. Esta reconstrucción, implica, necesariamente, una evaluación de los daños y una valoración de las perspectivas futuras.

Esta sección se inicia con una descripción exhaustiva de esos daños en los diferentes escalones del sistema educativo nacional y luego se hace una estimación de los costos, tanto del impacto como de la reconstrucción (el recuadro 4.5 nos da una idea global de los daños). En la siguiente sección se efectúa un análisis de los actuales y posibles efectos generales en la cobertura, la matrícula y la calidad de la enseñanza.

El sector educativo resultó gravemente lesionado por el impacto del huracán. El primer efecto negativo fue la clausura del año escolar 1998 un mes antes de lo oficialmente previsto en los niveles pre-

RECUADRO 4.5

Daños causados por el Mitch

De acuerdo con la evaluación realizada por un equipo de expertos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a finales del año pasado, el monto total de los daños ascendería a cerca de los 3.800 millones de dólares, es decir, el equivalente al 70% del PIB. De este total, 2.005 millones corresponden a daños directos (49%), y 1.800 millones a indirectos (51%) que se harán sentir a lo largo de un período de al menos cuatro años (CEPAL, 1999: 77-78)

Haciendo un desglose por sector nos encontramos con que la mayor parte se concentraron en los sectores productivos - US\$ 2.617,5 millones (el 69% de todos los daños) -, luego en la infraestructura - US\$ 665,4 millones (17%) - y finalmente en los distintos sectores sociales, US\$ 439,3 millones (12%). Dentro de estos, los más afectados fueron el de la vivienda, con US\$ 344,1 millones (78,32% de todos los sectores), el de la salud, US\$ 62,2 millones (14,15%), y el de la educación, US\$ 33,0 millones (7,5%)

Aunque las cantidades específicas de los daños reportados por otros estudios de impacto son un tanto diferentes (ver por ejemplo Banco Mundial, 1998), y que los mismos datos han variado en lo que va del presente año, en lo fundamental la magnitud y la distribución sectorial se muestran muy próximos en los distintos estudios, por lo que la idea global de la dimensión de la catástrofe ofrecida aquí es correcta.

Fuente: CEPAL 1999a

escolar, primario y medio. Esto significa que los alumnos, que normalmente pierden una gran cantidad de días de clase, debido a diversas razones, ahora tuvieron que agregar algo más del 10% del año escolar.

Además, en el nivel primario tenemos que considerar que si en condiciones normales el profesor logra cubrir un 81% en español y sólo un 76% en matemáticas (UMCE, 1998a: 69) de los programas establecidos, en esta ocasión el déficit seguramente fue más elevado.

También se debe considerar que para que los escolares de estos niveles no perdieran su grado, la Secretaría de Educación (SE) decidió aplicar la promoción automática en aquellos lugares donde hubo destrucción de los centros y los records escolares, y promediar las notas recibidas por el alumno hasta ese momento en aquellos donde no hubo daños directos. Es de suponer que esta medida tendrá efectos negativos en la calidad de la enseñanza, aumentará la repetición y deserción y bajarán aún más las tasas de rendimiento.

En el caso del nivel superior, en las universidades públicas también se perdió aproximadamente un tercio del tercer período anual y los alumnos fueron prácticamente promovidos sin seguir los procedimientos normales, lo que también vendrá a distorsionar su formación general y, específicamente, su desempeño en las clases que tendrán que cursar posteriormente.

En general, se estima que hay un total de 205.318 educandos que han resultado directamente afectados porque asisten a centros educativos seriamente dañados, lo que representa un 14.09 % del total del 1.456,860 alumnos reportados matriculados en 1998, en los niveles atendidos por la Secretaría de Educación. En el recuadro 4.6 se aprecia los severos daños a la infraestructura educativa.

En relación con la distribución geográfica del impacto, en los propios centros educativos, los mayores daños se concentraron en los departamentos del norte y en Gracias a Dios. Se puede observar que el departamento más afectado fue el de Colón que sufrió daños en el 40.8 % de su infraestructura educativa, luego le sigue Gracias a Dios con un 38.4% y Atlántida con un 29%. Los departamentos menos afectados fueron los del occidente: Copán con un daño de 3.2%, Lempira un 2.6%, Santa Bárbara un 1.7% y Ocotepeque un 1.2%.

Una análisis más profundo en términos de aulas nos muestra una dimensión un tanto diferente del impacto. Los departamentos que aparecen con más aulas dañadas son Colón (576), Choluteca (502) y Cortés (329), y con menos, Santa Bárbara (27), La Paz (14) y Ocotepeque (3) (ver cuadro 4.16).

Nuevamente, si el análisis se hace en cuanto a aulas destruidas la imagen cambia un poco otra vez. Los departamentos en donde hubo mayor número, por lo que el esfuerzo de la reconstrucción deberá ser mayor, son Francisco Morazán, con 252

RECUADRO 4.6

Daños a la infraestructura educativa del país

Al analizar los daños a la infraestructura educativa nos encontramos que fueron severos. El edificio de la Secretaría de Educación fue completamente destruido por la inundación que sufrió Tegucigalpa. Como una de las consecuencias, se perdieron los archivos y registros administrativos y académicos. Esta pérdida, además de hacer difícil el tener datos definitivos sobre la magnitud de los daños en el sector, podría crear serios problemas para la acreditación de los certificados y diplomas extendidos por la SE. Afortunadamente, por lo menos la información más reciente también se maneja a nivel de las direcciones departamentales.

En cuanto a los daños a la infraestructura escolar de los niveles atendidos por la SE, la última información compilada por esta, a partir de los reportes de los directores distritales y departamentales de todo el país, hasta el 17 de febrero del presente año, se estima que hay un total de 1.306 centros educativos dañados, lo que significa un 11.46% de los 11.389 existentes en 1998. De acuerdo con esta misma fuente, del total de aulas existentes a la llegada del huracán, 3.158 fueron afectadas directamente: 1,031 destruidas y 2,127 dañadas. A esto hay que sumar los daños a cocinas (152), bodegas (114), módulos sanitarios (755) y letrinas (1,082). También hay que añadir las pérdidas en material educativo que, según los datos reportados por la evaluación del Banco Mundial, ascienden a 215 millones de dólares (Banco Mundial, 1998: 41).

Fuente. Elaboración propia con base en datos oficiales de la SE, 1999.

aulas. Choluteca, con 238, y Yoro, con 122. Los departamentos en donde fue prácticamente insignificante son La Paz, Lempira y Ocotepeque, que no reportan ninguna aula destruida y muy pocas dañadas.

Los datos más recientes, disponibles en la SE, no permiten determinar con exactitud la distribución del impacto en los diferentes niveles del sistema educativo atendidos por esta Secretaría. Sin embargo, y no olvidando la pequeña diferencia con los datos que se han venido manejando, se puede tener una idea más o menos clara a partir de las estimaciones preliminares del Banco Mundial. De acuerdo con estas estimaciones, el nivel más afectado fue el primario (ver gráfico 4.6). De las 4,650 aulas consideradas dañadas, el 60.21% (2,800) corresponde al primario, el 23.65% (1,100) al secun-

dario, y el 16 12 % (750) al preescolar

En relación con los docentes, de los 50,068 que trabajaban en los niveles atendidos por la SE en 1998, 6,000 se reportan como damnificados lo que representa un 11 98% De este total, el 50% pertenece al nivel primario, el 33.33% al preprimario y un 16.60% al secundario. Finalmente, las pérdidas totales en materiales educativos, equipo y mobiliario se estiman en unos 40 millones de lempiras (CEPAL, 1999a: 37) Del total de pérdidas en este rubro, según estimaciones del Banco Mundial, el 46 51% pertenece a primaria, el 39.53% a preescolar y el 13.95% a secundaria

La educación superior fue la menos afectada Sin embargo, aunque no se cuenta con información específica, se sabe que sufrieron daños o destrucción menor las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales en Siguatepeque, las de la Escuela Nacional de Agricultura en Olancho, y el Centro Universitario Litoral Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicado en La Ceiba (cuadro 4.17). La evaluación preliminar de la CEPAL estima que los daños directos ascienden a 23.8 millones de lempiras y el costo total de daños directos es de 362 millones de lempiras (CEPAL, 1999a: 37)

Por su parte, sobre la base de la información recopilada, la SE ha calculado que los daños totales oscilan alrededor de los 35 millones de dólares⁸. Esto incluye tanto los directos como los indirectos a la infraestructura educativa de todos los niveles, más los ocasionados al equipo, mobiliario y material educativo Se incluyen, además, estimados sobre los daños a las escuelas utilizadas como albergues y sobre el costo de reubicación de estas en sitios más seguros

El costo de la reconstrucción será todavía más alto tanto por el cambio de la tasa cambiaria como por el aumento a los costos unitarios de los bienes afectados, cuyos precios serán más altos en el momento de la reconstrucción que antes La CEPAL estimó que el costo total de la reconstrucción de todo el país alcanzaría los 551 8 millones de lempiras, pero el plan presentado por la SE al Banco Mundial supera por mucho esa cantidad Hay que apuntar, sin embargo, que el Programa de Acción para la reconstrucción para el período 1999-2000 propuesto por la SE al Banco Mundial incluye acciones que van mucho más allá de la simple reconstrucción de la infraestructura. Este programa tiene tres componentes principales: un plan de emergencia de 100 días, un plan de transformación educativa, y un plan de acciones de reconstrucción de la infraestructura educativa (BM., 1998. 41-46)

El primero de estos componentes abarcó el período comprendido entre diciembre del 98 a marzo del 99 y tenía como propósito fundamental la reactivación del sistema educativo nacional y la preparación de las condiciones para el inicio de la acti-

CUADRO 4.16

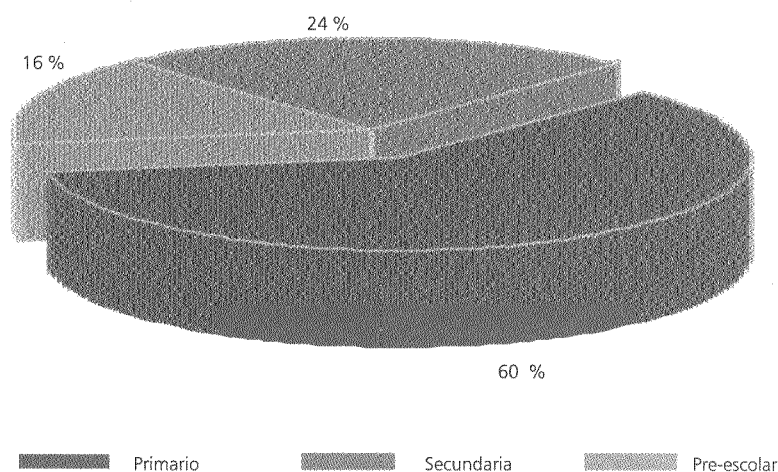
Daños a centros educativos, por departamento

Departamentos	Centros educativos afectados	Aulas destruidas	Aulas dañadas	Total aulas afectadas
Atlántida	161	31	221	252
Colón	170	102	474	576
Comayagua	47	60	118	178
Copán	18	2	30	32
Cortés	186	89	240	329
Choluteca	168	238	264	502
El Paraíso	69	17	74	91
Francisco Morazán	64	252	58	310
Gracias a Dios	68	40	108	148
Intibucá	48	17	63	80
Islas de la Bahía	27	10	58	68
La Paz	7		14	14
Lempira	15		30	30
Ocotepeque	3		3	3
Olancho	34	20	72	92
Santa Bárbara	12	15	12	27
Valle	87	16	115	131
Yoro	122	122	173	295
País	1,306	1,031	2,127	3,158

Fuente. Elaboración propia con base en datos oficiales de la S.E., 1998

GRAFICO 4.6

Distribución del total de aulas dañadas por nivel educativo



Fuente. Elaboración propia con base en datos preliminares de la SE, 1999

CUADRO 4.17

**Tipo de daños en el sector educación
(Millones de lempiras)**

Tipo	Directos	Indirectos	Total
Niveles atendidos por SE	200	0	200
Nivel superior	24	0	24
Equipo, mobiliario y material educativo	40	0	40
Instalaciones deportivas y culturales	14	0	14
Secretaría de educación	85	0	85
Uso de escuelas como albergues	0	50	50
Reubicación de escuelas	0	34	34
Total	362.4	84	446.4

Fuente: Elaboración propia con base a estimaciones de CEPAL 1999 y la Secretaría de Educación.

CUADRO 4.18

**Costo de los planes y acciones post Mitch
en el sistema educativo**

Planes y acciones	Precio total US\$	%
Plan de 100 días	10,158,400	15.8
Reparación y adecuación de centros	1,100,000	1.7
Reposición de material educativo	3,000,000	4.7
Reactivación admon. S.E.	1,670,000	2.6
Fortalecimiento distrital	1,200,000	1.9
Movilización de docentes	2,388,400	3.7
Estrategias de comunicación	800,000	1.2
Plan de transformación educativa	18,002,000	28.0
Fortalecimiento descentralización	1,690,000	2.6
Fortalecimiento participación comunitaria	4,012,000	6.2
Reorientación de la S.E.	900,000	1.4
Inversión en calidad de educación	10,400,000	16.1
Imprevistos	1,000,000	1.6
Plan de reconstrucción infraestructura	36,240,000	56.3
Reconstrucción de aulas nivel primario	10,240,000	15.9
Reconstrucción de aulas nivel medio	20,000,000	31.1
Construcción edificio S.E.	6,000,000	9.3
Total global S.E.	64,400,400	100.0
Reconstrucción en educación superior	2,368,616	3.5
Total US\$	66,769,016.00	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en información del Banco Mundial y CEPAL, 1999.

vidad escolar del presente año. El costo preliminar de dicho plan, estaba calculado en aproximadamente 10 millones de dólares e incluía actividades tales como: la compra de material educativo, la reposición de libros, equipos y mobiliario, la reactivación del sistema administrativo de la SE, el fortalecimiento de la gestión distrital, la movilización de docentes a las comunidades afectadas, etc

El plan de transformación educativa a ejecutarse durante el período 1999-2000 tiene un costo aproximado de 18 millones de dólares y comprende acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión descentralizadora, el apoyo al programa de participación comunitaria (PROHECO), reestructuración de la SE, y la rehabilitación de los insumos para la calidad educativa (ver cuadro 4.18)

Finalmente, el plan de acciones de reconstrucción de la infraestructura educativa, que tiene un costo estimado superior a los 36 millones de dólares, incluye acciones tendientes a la reconstrucción de las aulas destruidas y dañadas, y de las oficinas de la SE. En resumen, el cuadro 4 muestra que el costo estimado para la reconstrucción durante el presente año es de 66,769,016.00 dólares, de los cuales el 96.45% es para la inversión en los niveles atendidos por la SE, que fueron los severamente dañados, y sólo el 3.54% para la inversión en las universidades

Curiosamente, se puede observar que del total de la inversión prevista por la SE se asigna un porcentaje mayor a la reconstrucción de aulas del sector medio (31%), aun cuando los mayores daños ocurrieron en el nivel primario, al que se le asigna sólo un 16%. Probablemente esto se deba a que la mayor parte de la construcción de centros escolares esté a cargo del FHIS, como se analizará más adelante.

Las cifras caracterizan lo sucedido, pero también ocultan detalles importantes. Aunque el monto de los daños al sector educación es ya de por sí elevado, también acentúa el deterioro en el ya bajo nivel de vida de los hondureños. Además, los más golpeados fueron los grupos más vulnerables, con menores ingresos y tradicionalmente marginados, que perdieron no sólo sus viviendas sino también sus medios de subsistencia. Esto traerá secuelas negativas para la asistencia y permanencia de los educandos en su centro de educación

Las perspectivas del desarrollo humano en educación

El huracán no sólo vino a crear nuevos problemas, sino, ante todo, a agudizar los ya existentes y a poner al descubierto, con mayor crudeza, las grandes vulnerabilidades históricamente acumuladas. En un primer momento se calculó que el sector educativo iba a hacer retroceder la educación en 10

años (SE, 1999) Luego, según datos más ajustados de la CEPAL, se estima que los efectos del huracán se harán sentir a lo largo de un período de al menos cuatro años (CEPAL, 1999a:77)

Los datos muestran que se han agudizado tanto los problemas cuantitativos como los cualitativos. En el cuadro 4.19, se pueden deducir algunos escenarios y comprobar que se han agravado algunos de los déficits más notorios que ya existían, sobre todo la enseñanza primaria.

En preescolar el déficit de aulas, el número de alumnos sin acceso, el déficit de maestros y de materiales, no se incrementaron tanto como para pensar que se constreñirá la cobertura en el presente o el próximo año. Sin embargo, todo hace pensar que no se lograrán aumentos importantes en el futuro próximo

La situación del nivel primario es la más preocupante un 11.5 % de la infraestructura ha quedado destruida. Como indican los datos provisionales de matrícula del presente año (ver cuadro 4.20), ésta es casi igual, en números absolutos, a la del año pasado. Sin embargo, si se toma en cuenta que el promedio de alumnos nuevos durante la presente década ha sido de 23,439 por año y que este último sólo se matricularon aproximadamente 4,149 nuevos alumnos en relación con el año anterior, es claro que ha habido una disminución del 81.09 %. Sin embargo, a estos nuevos alumnos hay que añadir los matriculados en el Programa de Educación Comunitaria (PROHECO) que para este año alcanzarán un total de 23,517 en 475 escuelas improvisadas, ubicadas en algunas de las comunidades rurales más pobres, que no contaban antes con escuela, diseminadas en 11 departamentos (datos proporcionados por PROHECO) Aun así, la matrícula en primaria se encuentra por debajo de las proyecciones realizadas en diferentes estudios previos (ver SE/GTZ, 1997: 264; Membreño, J., 1996: 30).

Curiosamente, no sólo son los departamentos más afectados los que presentan disminución o estancamiento en sus matrículas, sino también y, sobre todo, los que sufrieron menos daños directos. Esto hace suponer que la disminución de la matrícula en términos de cobertura de estudiantes nuevos no es tanto producto de la incidencia directa del Mitch en la educación, sino, más bien, en otros sectores económicos y sociales directamente ligados al empleo y el ingreso familiar. Por último, es conveniente anotar que si consideramos la dinámica del crecimiento poblacional, se puede esperar que la cobertura del nivel primario bajará unos puntos.

Pero el impacto más negativo del huracán Mitch en el sector educativo se hará sentir en los aspectos cualitativos. Debido a las condiciones en que se han habilitado provisionalmente los centros educativos destruidos (en carpas, sin mobiliario adecuado o material educativo), lo más probable es que suban los índices de deserción, repitencia y repro-

CUADRO 4.19

Necesidades del sector educativo antes y después del Mitch

<i>Necesidades de infraestructura</i>			
Nivel educativo	Déficit de aulas antes de Mitch	Aulas destruidas	Total déficit
Pre-escolar	2,000	750	2,750
Primaria	5,000	2,800	7,800
Secundaria	7,000	1,000	8,100
<i>Necesidades de cobertura</i>			
	Niños sin acceso antes de Mitch	Niños sin acceso por Mitch	Total déficit
Pre-escolar	560,000	21,000	581,000
Primaria	160,000	100,000	260,000
Secundaria	45,000	30,000	75,000
<i>Necesidades de material educativo</i>			
	Déficit de materiales antes de Mitch	Déficit por Mitch	Total déficit
Pre-escolar	90,000	85,000	175,000
Primaria	350,000	100,000	450,000
Secundaria	S/D	30,000	S/D

Fuente. Elaboración propia con base en datos oficiales proporcionados por la SE. al Banco Mundial.

bación. A la deserción, también podría contribuir el hecho de que las familias de los lugares más afectados aducen que no tienen los recursos suficientes como para mantener a sus hijos en las escuelas. Afortunadamente, según datos provisionales proporcionados por la Unidad de Medición de la Calidad de Educación de la SE (UMCE), los niveles de rendimiento, medidos a finales de 1998 y a principios del presente año, no han variado negativamente en relación con 1997. En este año los educandos lograron un promedio de 36% en matemáticas y 40% en español de tercer grado (UMCE, 1998: 57). En la última medición mencionada, en el mismo grado, lograron un 43% en matemáticas y un 41% en español, lo que significa una mejora significativa, sobre todo en matemáticas. Es razonable pensar, sin embargo, que es todavía muy temprano para determinar el verdadero efecto del huracán en esta área y que seguramente este efecto se hará sentir con mayor peso en los próximos años.

En el nivel secundario la situación es menos grave pero no menos preocupante. La destrucción de la infraestructura escolar ha venido a agudizar aún más el ya serio problema del déficit de aulas. Esto,

CUADRO 4.20

**Matrícula nivel primario por departamento
1998-1999**

Departamentos	Matrícula 1998	Matrícula 1999	% de variación
Atlántida	63,271	61,262	-3.2
Colón	47,990	50,118	4.4
Comayagua	59,657	71,012	19.0
Copán	40,890	38,465	-5.9
Cortés	166,947	167,760	0.5
Choluteca	72,341	69,179	-4.4
El Paraíso	57,441	57,656	0.4
Francisco Morazán	188,889	187,964	-0.5
Gracias a Dios	12,387	13,818	11.6
Intibucá	31,973	33,384	4.4
Islas de la Bahía	5,594	5,100	-8.8
La Paz	26,047	29,645	13.8
Lempira	38,868	37,010	-4.8
Ocotepeque	14,090	15,887	12.8
Olancho	71,687	69,679	-2.8
Santa Bárbara	58,922	58,799	-0.2
Valle	32,816	29,118	-11.3
Yoro	87,104	84,969	-2.5
País	1,076,914	1,080,825	0.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de la S.E. y Direcciones Departamentales

aunado al hecho de que el número de alumnos sin posibilidad de ingresar casi se ha duplicado a causa del Mitch, hace pensar que la cobertura, ya insuficiente, tenderá a bajar en los próximos años.

En términos de matrícula, aparentemente el huracán no se hará sentir este año en el nivel secundario. Según datos provisionales proporcionados por la Secretaría de Educación y las Direcciones Departamentales de Educación, la matrícula es de aproximadamente 280,817 alumnos (sin contar los matriculados en las escuelas básicas), lo que está en relación con las proyecciones para el nivel y con el ritmo de crecimiento que ha venido teniendo a lo largo de la presente década.

Un análisis de los datos por departamento muestra que la mayoría de los afectados (con excepción de Yoro), han tenido un aumento de su matrícula (algunos significativos) en este nivel (Atlántida 9%, Colón 27%, Choluteca 4%, Francisco Morazán 3%) e Islas de la Bahía (1%). Sorprendentemente, son los departamentos que no soportaron las peores secuelas los que redujeron su matrícula (La Paz, 11%, Santa Bárbara, 7%)

No obstante, por las mismas condiciones ya mencionadas para el nivel primario, es de suponer que los índices de eficiencia y calidad también tenderán a descender o por lo menos a mantenerse tan bajos como los de años anteriores, en todos los departamentos.

En general, podemos decir que hasta el momento el gobierno, con el apoyo de la ayuda internacional, ha podido paliar la situación del sector educativo en lo que va del año. Según el Informe de *Avances en la Reconstrucción Nacional* publicado por la Presidencia de la República, se han construido y reparado, a través del FHIS, 747 aulas escolares y se han rehabilitado, en colaboración con las municipalidades y otras organizaciones comunitarias, 131 centros educativos dañados (Presidencia de la República, 1999: 17). Estas y otras medidas, sin embargo, no han logrado resolver la situación de una manera satisfactoria. Para muchos sectores de la nación, sobre todo de la sociedad civil, el gobierno nacional no ha actuado con la rapidez del caso y se ha quedado muy corto, sobre todo en la reforma del sistema educativo hondureño.

Desde una perspectiva más específica, es también claro que el gobierno no logrará cumplir con las metas educativas del Plan de Acción Nacional (PAN) para la presente década, y no necesariamente a causa del huracán. Una de las principales era reducir el analfabetismo a 16% para el año 2000.

Las tendencias analizadas anteriormente indican que lejos de acercarnos a esta meta nos estamos alejando. Sólo con campañas agresivas y focalizadas se podrá alcanzarla en un plazo corto. En el nivel preescolar, la cobertura en 1990 se encontraba en un 16% y se pretendía llegar al 32% en el año 2000. Algunos estudios de avance proclaman que esta meta se ha logrado y sobrepasado (UNIS, SECPLAN, UNICEF, PNUD, 1995, SE/GTZ, 1997), pero la realidad es que si excluimos la matrícula de los CIES (que sólo duran dos meses), todavía se está muy lejos de lograrla.

En relación con la enseñanza primaria la cobertura se ha mantenido alrededor del 85% en toda la década. El PAN tenía como objetivo la universalización para el año 2000. Todo hace pensar que no se alcanzará en ese año ni en un futuro cercano. En cuanto a la educación secundaria la meta era pasar de una cobertura del 31% en 1995 a una de 50% en el año 2000. Aunque ésta ha aumentado a 35% en 1997, es también imposible que se logre la meta para el próximo año. Al igual que con las otras, sólo redoblando esfuerzos se podría llegar a ella en un futuro cercano. En relación con el mejoramiento de la calidad, es también difícil pensar que se reducirán los índices de repitencia, deserción y reprobación en el corto plazo, si se toman en cuenta las tendencias y las condiciones examinadas aquí.

Hay que tener presente que, de acuerdo con datos del Banco Mundial, Naciones Unidas y otras fuentes, los objetivos educacionales que son requi-

sitos para el despegue económico de los países en vías de desarrollo son de por lo menos el 50% de la población adulta con educación primaria, el 25% con secundaria, la atención a las necesidades de alfabetización y sustanciales reformas en la educación superior (Steenwyk, N., y Mejía, M., 1994: 2, 7).

Antes de la llegada del huracán Mitch se sabía que casi la mitad de la fuerza de trabajo no tenía primaria completa, más del 80% no contaba con secundaria completa y no existían mecanismos eficaces para incorporar a los que habían quedado fuera. Aun así, se suponía que por lo menos en educación primaria el umbral necesario para el despegue económico se alcanzaría al final de esta década (ibid: 7).

Los efectos del Mitch, sin embargo, nos hacen pensar que ni siquiera este umbral será cruzado en el presente siglo y que los otros tampoco en un futuro cercano, a menos que se tomen las medidas pertinentes no sólo para lograr estas metas sino para avanzar efectivamente hacia el propósito fundamental de impulsar el desarrollo humano. A continuación se analizan tres aspectos fundamentales relacionados con esta cuestión.

Hacia una estrategia para superar los déficit educativos

Existen dos vías importantes a través de las cuales es posible dinamizar el desarrollo humano: el crecimiento económico y el uso del gasto social. (PNUD, 1998: 18). En relación con el primero, el PNUD ha venido insistiendo, desde 1990, que este es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar un mayor desarrollo humano. Para que el crecimiento económico impulse el desarrollo humano, debe generar más empleo y seguridad, propiciar la libertad de las personas, distribuir equitativamente los beneficios, promover la cohesión social y salvaguardar el desarrollo humano futuro (PNUD, 1996: 63).

Tal como se afirma en el *Informe de Desarrollo Humano 1998* de Honduras, el crecimiento del desarrollo humano desde los años sesenta no se ha logrado debido a un incremento económico fuerte sino a pesar de que éste ha sido insuficiente y de la existencia de grandes inequidades sociales y geográficas (PNUD, INDH, 1998: 55, 68). Por lo menos para los próximos años, el desastre provocado por el huracán Mitch nos deja el reto de pensar en el desarrollo humano prácticamente sin crecimiento económico. Pero también nos deja la posibilidad de reorientar lo que se ha venido haciendo.

El Mitch le ha causado al país lesiones sin precedentes. No sólo se ha perdido parte importante de la infraestructura productiva, vial y social, bienes de capital y la producción de dos años, sino que también se ha visto afectada en sus logros macroeconómicos de crecimiento y estabilización,

profundizando los desequilibrios ya existentes. Según datos de la CEPAL, en el periodo 1991-1997 la economía nacional creció a una tasa promedio de 3.7% y de 1995 a 1998 a una de 4.3%, impulsada sobre todo por el aumento en la inversión y las exportaciones, particularmente las no tradicionales (CEPAL, 1999c: 82, 84). Durante los primeros diez meses de 1998, la economía exhibía un desempeño favorable. Las estimaciones auguraban un crecimiento del PIB de 5.1% (ibid: 85). El huracán contrajo bruscamente esa expectativa a un 2.7%. Pero los efectos mayores se presentarán durante 1999, cuando se calcula que la actividad económica se contraerá (-6.8%), al reducirse el crecimiento en todos los sectores, excepto el de la construcción (ibid: 90-91).

Es muy probable, también, que, sobre todo en los dos próximos años, la baja de la actividad productiva genere más desempleo y subempleo. El ya reducido nivel de ingreso per cápita disminuirá aún más, y la pobreza tenderá a aumentar, sobre todo en el medio rural y en las áreas marginales de las ciudades, lo cual pondrá en situación todavía más difícil a los grupos más desprotegidos de la sociedad (ver el apartado anterior de este capítulo).

Pasada la etapa de la emergencia y la rehabilitación, urge que el gobierno y la sociedad civil elaboren una estrategia de reconstrucción que no sólo reactive el crecimiento económico, sino que lo haga más equitativo y que lo reoriente a convertirse en verdadero pilar del desarrollo humano sostenible. En esta tarea, la inversión en el conocimiento y en la formación del capital humano a través de la educación es una condición *sine qua non* para lograr una transformación productiva con equidad. Por eso, la educación debe continuar siendo, no sólo de palabra, sino de hecho, la prioridad del Estado.

El gasto social es otra vía importante para impulsar el desarrollo humano⁹. Aunque siempre sujeto a las restricciones de los montos presupuestarios, lo más importante para que se asigne un gasto social adecuado es que exista un compromiso político de parte del gobierno con el desarrollo humano. En términos generales, en lo que va de la presente década, ese gasto ha estado muy alejado de los índices recomendados por el PNUD para propiciar el desarrollo humano (ver cuadro 4.21).

Sin embargo, hay que recordar que sólo en el servicio de la deuda externa Honduras paga más de lo que invierte en el gasto social. Además, para que el presupuesto gubernamental impulse un mayor desarrollo humano es necesario mejorar ostensiblemente la razón de asignación. Esto se podría alcanzar a través de nuevas formas de captación de ingresos, de reasignación de fondos hacia aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y de mecanismos que permitan un uso más adecuado y eficiente de los recursos disponibles. Como adelantándose al desastre, el Presidente Flores prome-

CUADRO 4.21

Razones de gasto total y gastos sociales con base en el gasto del gobierno central (datos porcentuales)

	Razón gasto	Razón asignación social	Razón prioridad social	Razón gasto desarrollo humano
1993	30.5	28.1	53.9	4.0
1994	25.7	36.7	51.3	3.5
1995	24.9	27.8	57.5	4.0
1996	22.8	32.2	53.1	3.9
1997	22.6	31.6	47.8	3.4
1998 a/	23.0	30.2	50.0	3.5
PNUD b/	25.0	40.0	50.0	5.0

a/ Cifras preliminares

b/ Índices recomendados por el PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1991

Fuente: Secretaría de Finanzas, Memoria, 1998.

tió en su plan de gobierno que «todo recurso disponible, obtenido de la condonación y reestructuración de la deuda externa, será utilizado como inversión en la educación» (Flores, C.R. 1998:27). De hacerse efectiva, la condonación podría ser el instrumento de transformación esperado por todos.

Mejorar la distribución del gasto social e incentivar la participación

En Honduras, el paso de un nivel de desarrollo bajo en los sesenta a uno medio en los noventa se realizó sobre la base de una significativa inversión en educación y salud primaria. Sin embargo, el monto de la inversión y las acciones emprendidas para mejorar los índices cuantitativos y cualitativos, sobre todo en educación, no han sido suficientes como para contrarrestar la vulnerabilidad evidente que todavía presenta el sector. Uno de los grandes problemas lo ha constituido la manera como se ha distribuido el gasto social, especialmente en educación.

El gasto en educación ha representado más de la mitad del gasto social desde inicios de la década de los ochenta, pero ha mostrado una tendencia a descender, pasando de un promedio de 58.3% de esa década, a un 52.9% en 1995 (UNIS/SECPLAN, UNICEF/ PNUD, 1995:28, SECPLAN/BID.UNICEF/ Ruta Social, 1997: 30). La parte del gasto en educación en el PIB también ascendió de un 4.2% en 1990 a un 4.7% en 1996 (SECPLAN, BID.UNICEF Ruta Social, 1997: 28; SE/GTZ, 1997: 45), mientras en América Latina es de 6.0%, lo cual muestra una inversión en capital humano bajo.

Excluyendo las transferencias que la SE efectúa a otras instituciones, el 94% de los recursos son destinados para salarios y previsión social del magisterio, limitando con esto los recursos destinados para gastos de operación y capital, que en los últimos años han sido financiados con fondos externos (prestamos y donaciones) (ibid: 43). Esto explica, en gran medida, el porqué la inversión en calidad es mínima.

En función de la inversión por nivel educativo, tal como lo muestra el gráfico 4, la distribución del presupuesto ejecutado refleja una alta inversión, aunque no suficiente, en el nivel primario, y una peligrosamente baja para nivel medio y la educación de adultos. Esta asignación presupuestaria debería mejorarse de acuerdo con las cambiantes necesidades de la demanda y de las necesidades del desarrollo.

Si se analiza aún más detenidamente la ejecución presupuestaria por cada nivel, nos damos cuenta que más del 95% se gasta en salarios y el resto en infraestructura o subsidios, dejando muy poco para invertir en la mejora de la calidad de los servicios prestados, que es el problema más serio que enfrenta el sector (Edwards, J, 1995).

La distribución presupuestaria también sigue fomentando la inequidad. Los logros obtenidos en educación no han llegado a todos por igual. Entre el 20% de población más pobre -especialmente las mujeres- el nivel educativo continúa siendo extremadamente bajo, lo mismo que entre los jóvenes. Por regiones geográficas, los niveles educativos son peores en el área rural, y especialmente en los departamentos de la zona occidental (SECPLAN/UNIS, 1996). La inversión en educación no responde a esta realidad. Los departamentos que absorben la mayor parte del presupuesto en educación son los de Francisco Morazán y Cortés (también con los menores índices de pobreza), mientras que los de occidente tienen una asignación bastante baja (SECPLAN/BID/UNICEF-Ruta Social 1997: 30, PNUD, INDH, 1998: 31-35). Afortunadamente, el huracán Mitch no afectó estas zonas más vulnerables, lo cual no significa que no necesiten atención.

La tarea de reconstruir la infraestructura educativa perdida no debe hacer olvidar que la remoción de los obstáculos que impiden la ampliación de las oportunidades educativas de la gente es tarea prioritaria de una estrategia de desarrollo humano. Hasta el 17 de febrero del año en curso, el FHIS había invertido un total de Lps. 159,334,422.46 millones en 671 proyectos (sobre todo de reconstrucción) en el sector educativo, lo que representa un 30.2% del total de la inversión realizada. El cuadro 4.22 muestra en porcentajes que no necesariamente se ha invertido en donde más se necesita.

Además de ampliar las oportunidades de la gente, y especialmente de aquellos sectores tradicionalmente excluidos de los beneficios de la educación, el gobierno y la sociedad deben también enfrentar los grandes retos que todavía quedan no

CUADRO 4.22

Inversión del FHIS en el sector educativo, Nov.98/Feb.99

Departamento	% inversión
Atlántida	11.0
Francisco Morazán	9.4
Yoro	8.9
Choluteca	7.6
Olancho	7.3
Colón	7.1
Comayagua	7.0
Lempira	6.4
Gracias a Dios	6.6
Cortés	6.4
La Paz	5.5
Santa Bárbara	4.5
Valle	4.5
Islas de la Bahía	3.0
El Paraíso	2.7
Copán	1.2
Intibucá	0.8
Ocotepeque	0.2
Total	100.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del FHIS III, 1999.

sólo con sus propios medios, sino que con una amplia participación popular. En este sentido, se debe continuar con la modernización y descentralización para aumentar la participación democrática y orientar las decisiones gubernamentales en función de las necesidades de los afectados. También se debe incentivar aún más la participación de otras dependencias del gobierno y especialmente de la empresa privada en el nivel primario y superior. Además, se necesita promover aún más la participación popular, como se ha estado haciendo con la creación de los Centros Comunitarios para la Iniciación Escolar (CCIE) y con el Programa PROHECO, sin descuidar la calidad. En el nivel superior, las universidades y los demás centros de educación superior deben de tratar de generar más fondos internos, ya sea mediante la venta de servicios o mediante la generación de investigaciones para el mismo gobierno o para la empresa privada.

Invertir más en la calidad

Además de reconstruir la infraestructura y de ampliar la cobertura del nivel preescolar, medio y superior, el gran reto de Honduras en términos de educación continua siendo el mejoramiento de la

calidad de los servicios que ofrece. Muchos de los logros que se han mencionado anteriormente se han logrado sacrificando la calidad. La transformación del desarrollo del país pasa por la reversión de este patrón histórico.

La calidad tiene que ver en gran medida con los niveles de igualdad, eficiencia y pertinencia social que genera el sistema educativo. Ya se ha mencionado que la educación nacional continúa siendo inequitativa, porque a pesar de los logros, todavía limita la participación al ofrecer escasas oportunidades a los pobres, las mujeres y los jóvenes.

En términos de eficiencia, el sistema educativo todavía presenta serios problemas. Esta ineficiencia se manifiesta en los altos índices de repitencia y deserción, que si bien muestran leve mejora en los últimos años, le cuesta anualmente al Estado alrededor de US\$ 42 millones (SECPLAN/BID/UNICEF/Ruta Social, 1997: 44). Si no se atienden estos problemas, la inversión del Estado en el desarrollo siempre se verá limitada por la falta de una adecuada cobertura y eficacia del sistema educativo.

Finalmente, la pertinencia social de los contenidos educativos es más difícil de medir. Para ello se necesitarían estudios de mercado y de otro tipo que todavía no existen en el país. Sin embargo, y aunque no se tengan datos precisos, en la realidad se ve que, a pesar de los esfuerzos hechos por los últimos gobiernos en materia de reforma curricular, los contenidos educativos de todos los niveles todavía están desvinculados del mercado de trabajo, y no le proporcionan al educando ni las herramientas cognitivas mínimas que le habiliten para realizar sus aspiraciones personales ni las capacidades necesarias que potencien su participación activa en la actual sociedad moderna globalizada. Mientras esto no se mejore, las posibilidades de desarrollo humano continuarán siendo restringidas por largo tiempo.

La deuda externa

«Es importante, desde el punto de vista estratégico, tener ese foco gemelo -alivio de la deuda y alivio de la pobreza- ya que pueden ser reforzados mutuamente -enfoquemos ambos porque si recalcamos exclusivamente alivio de la deuda, quizás podamos ganar la lucha, pero perderíamos la guerra.» Michael Camdessus (FMI) marzo de 1999

Antecedentes

La deuda externa se encuentra en forma permanente en el debate público de desarrollo tanto en la clase política como en los medios de comunicación y la clase intelectual. Sin embargo, como se expresó al inicio de este capítulo, no representa un tema importante en la gente común pese a representar una de los factores determinantes en la asignación de la inversión gubernamental.

En Honduras, al serio estancamiento en su crecimiento per cápita, el cual ha sido casi nulo en los últimos veinte años, se une, en un vínculo perverso

so, el elevado nivel de endeudamiento externo, que lo ubica como el segundo país más endeudado de Centroamérica, después de Nicaragua.

La deuda externa pública y garantizada de Honduras ha aumentado en promedio, de 1972 a 1996, un 15% por año, en dólares nominales. El período de mayor endeudamiento tuvo lugar en la década de los ochenta, cuando se triplicó al pasar de unos 1 000 millones a 3.000 millones de dólares. Con ello la relación de la deuda con el PIB superó la cifra crítica de 80% a partir de 1986 (PNUD, INDH, 1998:71)

En este apartado se analiza el problema de la deuda externa en función de los principales agentes que intervienen en el proceso del otorgamiento, uso y pago del crédito externo. En este sentido, el primer agente es quien otorga el crédito, o sea los institutos financieros internacionales (IFI); un segundo agente es quien contrata, administra y asigna los recursos provenientes del crédito externo, o sea el propio gobierno; el tercer agente es la sociedad civil que, como expresión de toda la ciudadanía, paga la deuda a través de los impuestos.

A continuación se describen los principales IFI y sus condicionalidades relacionadas con la deuda externa: primero, el Banco Mundial (BM) y la iniciativa HIPC¹⁰, segundo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de ajuste estructural, tercero, el Club de París, y, cuarto, el G-8 y la Declaración de Colonia.

Iniciativa para países pobres severamente endeudados (HIPC)

El país, junto a otras 40 naciones en vías de desarrollo, se encontraría «calificado» dentro de la iniciativa de alivio de la deuda externa para los países pobres severamente endeudados establecida por el Banco Mundial en setiembre de 1996. En América Latina, Bolivia ya ha sido favorecida y se espera que Nicaragua también lo pueda ser en el año 2000.

En el caso de Honduras, son los cambios en los parámetros de elegibilidad, aprobados en julio, en la reunión del G-7 en Colonia y ratificados en setiembre por las asambleas del FMI y del Banco Mundial, los que garantizan que el país cumple con todos los requisitos necesarios para ser incluido como beneficiario de la iniciativa HIPC.

Las últimas acciones en el proceso de negociación de la deuda externa se detallan a continuación.

Acuerdo Programa Reforzado de Ajuste Estructural con el Fondo Monetario Internacional

La firma del Servicio Reforzado de Ajuste estructural (ESAF) permitió al país acceder al Club de París para readecuar o condonar su deuda externa. El cumplimiento del programa ESAF no sólo es necesario para acceder al Club de París, sino también para ser sujeto de la iniciativa para países pobres altamente endeudados (HIPC). En ese contexto, es

RECUADRO 4.7

Medidas estructurales del ESAF

Finanzas Sector Público

- Fortalecimiento institucional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y total aplicación del código tributario.
- Aprobación por HONDUTEL de un incremento en sus tarifas domésticas.
- Aprobación de un aumento de las tarifas de electricidad.
- Limitación de los salarios a 7.2% del PIB.
- Mantener en términos nominales el valor anualizado de subsidios de consumo de electricidad en 280 millones de lempiras.
- Contratar los servicios de una firma de auditoría externa para asegurar la transparencia en el uso de los recursos externos recibidos para la emergencia y la reconstrucción.

Privatización

- Aprobar un decreto autorizando venta de las acciones de COHDETEL al sector privado.
- Aprobar cancelación para permitir al sector privado a participar en construcciones y operaciones de carreteras.
- Invitar al sector privado a participar en licitaciones de concesión de los aeropuertos privados.
- Someter al Congreso proyectos de reformar el sector del agua y el saneamiento.

Reforma del Sistema Financiero

- Implementar regulaciones del sistema bancario.
- Regulación de las operaciones de las casas de cambio y las compañías de seguros.
- Reforma de Pensiones y Seguridad Social.
- Enviar al Congreso proyectos de ley orientados a reformar el IHSS, incluida la elevación del techo de las contribuciones salariales para seguridad social.
- Aprobar legislación para regular fondos privados de pensiones.

Política Sector Externo

- Asegurar total flexibilidad de la tasa de cambio dentro de la banca.
- Evitar contratar o dar garantía de crédito externo no concesional.

Fuente: Gobierno de Honduras, Documento ESAF, 1999.